

NUESTRO JUICIO FRENTE A LA CRISIS

1. Transcurridas algunas semanas desde que el Ministro de Hacienda señor Lüders asumiera su cargo, es posible tener una perspectiva clara del real significado de su gestión. El Ministro Lüders, destacado representante de los economistas de Chicago, ha confundido a la opinión pública. Por una parte ha reconocido en su Exposición reciente los numerosos errores de la política económica y el virtual fracaso del modelo. Sin embargo, los lineamientos de su propia política no son diferentes de los que el país ya ha conocido, experimentado y sufrido hasta la saciedad en estos nueve años.
2. El Ministro Lüders fué partidario en el pasado de la rebaja de salarios para producir el mal llamado "ajuste automático" que fracasara estrepitosamente. Hoy revive esa idea proponiendo una reducción de salarios reales de un 16%, reducción que se suma a las fuertes bajas ocurridas en los salarios durante los últimos meses. Sólo cambia el método. Lo hace a través de mayor inflación y de la eliminación del reajuste de los salarios. Es la vieja proposición de De Castro, rechazada entonces por el gobierno, que ahora se implementa con nuevo ropaje.
3. El Ministro ha prometido reactivación. Pero en los hechos el Estado se mantiene pasivo frente al descalabro industrial, frente a la grave crisis agrícola y ante la parálisis de la construcción. No hay iniciativa pública para recuperar niveles mínimos de inversión. No modifica los aranceles. No hace una política monetaria activa. Mantiene deprimido el gasto público. Sugiere que la reducción del desempleo, que ya supera las desastrosas cifras de los años 30, requiere de una caída adicional en las remuneraciones de los trabajadores, sin entender lo que parece elemental: que una nueva pérdida en el poder de compra de la población no puede sino acentuar aún más la recesión, con el doloroso costo en términos de pérdidas adicionales de fuentes de trabajo que el país ya conoce.

En síntesis, la política económica del Ministro Lüders no se diferencia en ningún aspecto sustantivo del tristemente célebre "ajuste automático".

Sólo se ha modificado, al parecer transitoriamente según insinúa el Ministro, la política cambiaria. Pero se sigue confiando, más allá de las modificaciones superficiales de carácter cosmético, en las caídas de precios y salarios, y en el endeudamiento externo como los mecanismos reactivadores.

Esta política no tiene destino. No provocará reactivación, no generará nuevos empleos y dejará nuevamente al sector privado librado a su propia suerte, endeudado, sin estímulos ni incentivos, en una economía inestable, recesiva, sometida a una excesiva y perjudicial competencia externa y más vulnerable que nunca a eventos internacionales fuera de su control.

4. El Ministro reconoce errores en la política económica de los últimos nueve años. Lo que no dice es que el crecimiento de la economía entre 1974 y 1982, medido como el Producto Geográfico Bruto per cápita, había sido NULO; que la inversión ha sido tan baja como para apenas representar alrededor de un 70% en promedio, respecto de las tasas alcanzadas en la década del 60; que el desempleo, incluyendo el PEM, que no ha bajado del 15%, y ha triplicado las tasas históricas y que alcanza ahora a casi un 30%; que el salario medio en el período 1974-1981 es un 25% más bajo que el nivel en 1970 y que algo similar ocurre con las pensiones y la asignación familiar; que, al contrario de lo sostenido por el gobierno, el gasto público por persona, en sectores sociales bajó un 30% si se compara el nivel de 1979 con el de 1970; y, finalmente, que se ha llegado a estos desastrosos resultados, a pesar de haber sobreendeudado irresponsablemente al país en el exterior, con las adversas consecuencias que todos conocemos.

Han sido los propios banqueros internacionales quienes han revelado su pérdida de confianza en el modelo, disminuyendo severamente los créditos disponibles

para ser utilizados por el país. Ello reviste gravedad no sólo porque altera profundamente el funcionamiento normal del sistema económico, como es obvio hoy día. Además introduce un elemento de incertidumbre respecto de la posibilidad de renegociar la cuantiosa deuda externa cuando, en unos meses más, se haga evidente la necesidad de seguir ese camino. Se trata pues de un esquema económico que ha fracasado en toda la línea.

5. El régimen político autoritario no es ajeno a este fracaso.

La falta de participación ciudadana, la inexistencia de un debate público abierto sobre la conducción económica, la falta de sanción pública a la aplicación de políticas erradas, son propias de un Gobierno que actúa a espaldas de la opinión pública.

Es inconcebible pensar que en un sistema democrático se hubiera podido persistir en la aplicación de una política que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles inaceptables y que ha producido la quiebra de las principales actividades nacionales por la obsecada aplicación de políticas cambiarias y monetarias rígidas y absurdas.

Habría sido asimismo inconcebible que se produjeran cuantiosas transferencias de actividades públicas a manos privadas a precios que representaron fuertes donaciones de bienes públicos a grupos privados.

Nadie habría pensado tampoco en designar Ministro de Hacienda a una persona que, por competente que sea, ha participado como uno de los actores principales en la formación y posterior deterioro financiero de uno de los mayores grupos económicos privados creados al amparo de las ventajas que le daba el modelo.

El fracaso económico es el mejor testimonio del grave riesgo que significa el control absoluto ejercido por una tecnocracia que se siente iluminada, que sólo

puede prevalecer en un régimen autoritario. Todo, hasta el fracaso, se concibe como un viaje sin retorno.

La democracia no llega jamás a tales niveles de ineficiencia. El libre juego de opiniones diversas, el examen público de los problemas, la presencia efectiva y sin censura de la voz de los actores económicos y sociales involucrados, conducen normalmente a soluciones más razonables. Es cierto que la democracia significa negociación y compromiso y que el proceso político tiene costos. Pero, en definitiva, tales costos son infinitamente menores que los que produce el extremismo económico que se siente protegido por el poder político autoritario. Y si alguien tiene dudas, basta el hecho ya enunciado de que el crecimiento del ingreso per cápita ha sido nulo en casi una década, probablemente por primera vez en la historia del país.

El gobierno, en lugar de buscar la concertación democrática, acentúa las divisiones, impide la participación ciudadana, mantiene el Estado de Emergencia, favorece a sus incondicionales y sanciona a la gran mayoría de la población, y por último, no avanza en su propio programa de transición a la democracia. En síntesis, mantiene cerrada la posibilidad de que los chilenos expresen realmente lo que desean. A un pueblo oprimido y sin esperanzas no se le puede pedir que se integre en la gran tarea de recuperación nacional, que se hace cada día más urgente para sacar al país de la postración material y espiritual en que se encuentra.

Después de todo la crisis del modelo económico no es sino un aspecto en la crisis de todo el sistema. Es por ello que los necesarios cambios económicos no pueden ya dissociarse de las profundas rectificaciones requeridas en el plano político. Las soluciones técnicas a la actual crisis económica existen. Ellas requieren sacrificios, pero éstos pueden hacerse más tolerables y más equitativos cuando son compartidos, cuando son el resultado de una concertación de voluntades y cuando conducen a una real solución de fondo de los problemas.

En definitiva la crisis económica actual es una crisis política porque se ha producido una pérdida de confianza en la estabilidad del sistema económico.

La paralización del país no puede superarse dentro del actual modelo porque sus creadores están inevitablemente comprometidos con él y su historia. De allí la confusión y falta de claridad: unos diciendo que nada esencial ha cambiado y otros reconociendo errores graves e insinuando cambios que no se materializan.

Sólo la democracia en que los agentes económicos tienen presencia y voz garantizadas, puede superar una crisis de esta envergadura. La confianza y credibilidad interna y externa que se necesita, las políticas económicas claras y estables que se reclaman, sólo pueden provenir de un esfuerzo conjunto de todos los agentes económicos apoyados en la seguridad que otorga la propia participación en las decisiones.

En suma, lo que el país necesita son esquemas enteramente diversos del dogmatismo neo-liberal. Chile reclama una economía mixta en la que corresponda un rol trascendente a la iniciativa privada dinámica pero caracterizada también por un Estado activo que asume sus responsabilidades como agente del desarrollo, regulador de la economía y responsable de las políticas distributivas.

La economía así concebida, implica que Estado y empresa privada sean "socios" de un esfuerzo común, y que, por su parte, empresarios y trabajadores armonicen sus respectivos intereses, aspiraciones y necesidades en un Pacto Social en que la eficiencia económica vaya de la mano con la justicia social.

No se trata de vanas palabras ni utopías demagógicas o populismo irresponsable. Por el contrario, constituyen la esencia de los procesos que permitieron el espectacular desarrollo de las naciones industriales.

Una estrategia nacional de desarrollo que precisa un gran esfuerzo común de todos los sectores del país, en condiciones de responsabilidad compartida y

de un efectivo Pacto Social, está al alcance de los chilenos, pero requiere para su materialización las mismas condiciones de libertad, justicia y democracia que han presidido el desarrollo de las naciones mas avanzadas de la tierra.

GRUPO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DC.

Santiago, noviembre de 1982

www.archivopatricioaylwin.cl